

- Tailandia debe, dentro de un plazo determinado, regularizar a los refugiados en Tailandia para que puedan finalmente adquirir la nacionalidad o convertirse en residentes permanentes

Margaret Green-Rauenhorst (margaret.green@theirc.org) es Consejera Técnica Superior en materia de Protección y Estado de Derecho de la Unidad de Derechos y Gobernabilidad del Comité

Internacional de Rescate (www.theirc.org). Karen Jacobsen (karen.jacobsen@tufts.edu) es Directora del Programa sobre Migraciones Forzadas y Refugiados del Centro Internacional Feinstein de la Universidad de Tufts (<http://fic.tufts.edu>). Sandee Pyne (sandee.pyne@thailand.theirc.org) es la Coordinadora de Reivindicaciones del Comité Internacional de Rescate en Tailandia (www.theirc.org/where/the_irc_in_thailand.html).

Los resultados completos de la encuesta se encuentran disponibles en línea en <http://fic.tufts.edu/?pid=76>

El CIR agradece la colaboración de las investigadoras Julia Fisherman y Lindy Worsham y de nuestros socios comunitarios, sin quienes este estudio no habría visto la luz.

Los solicitantes de asilo birmanos en Tailandia siguen sin tener dónde dirigirse

Chen Chen Lee y Isla Glaister

Hasta que las autoridades tailandesas y ACNUR no proporcionen un procedimiento de asilo sistemático y justo, frente a uno que depende de acontecimientos y fechas concretos, el sistema actual de asilo no podrá dar más de sí.

Si existe un resultado positivo de la brutal respuesta de la Junta birmana a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en Yangón en septiembre de 2007, es que ACNUR ha reanudado el registro de los nuevos solicitantes de asilo procedentes de ese país, producido tras una interrupción de dos años, que empezó en noviembre de 2005 cuando la agencia, a petición de las autoridades tailandesas, dejó de registrar a las personas procedentes de Birmania que buscaban asilo y protección internacional en Tailandia.

Hasta enero de 2004, ACNUR gestionaba todo el procedimiento de determinación de la condición de refugiado para los solicitantes de asilo birmanos. Debido a que las autoridades tailandesas deseaban tener un control mayor sobre el proceso de examen, a partir de enero de 2004, los solicitantes de asilo birmanos sólo podían registrarse con la agencia y obtener una papeleta (por eso se les suele llamar 'titulares de papeleta'). Los que llegaban después de noviembre de 2005 no tenían ocasión de registrarse ni recibir ningún tipo de documentación o protección.

Anteriormente, había tres grupos de titulares de papeleta, situados en las provincias de Bangkok, Mae Sot y Kanchanaburi, que comprendían un total de 10.887 personas.¹ En septiembre de 2006, más de 2.000 de ellos fueron transferidos a campos de la provincia de

Tak y se sometieron al proceso tailandés para la obtención de asilo a través de la Junta Provincial de Admisiones (PAB, por sus siglas en inglés). En la actualidad, todos se encuentran en campamentos, reconocidos como refugiados. Sin embargo, pese al diálogo continuo entre ACNUR y las autoridades tailandesas, ninguno de los otros titulares de papeletas ha sido transferido a ningún campo. La mayoría de los solicitantes de asilo siguen sin protección desde principios de 2004.

El 15 de septiembre de 2007, ACNUR volvió a abrir el registro para todos los que llegaron a Tailandia a partir de esa fecha por motivos relacionados con las protestas de Yangón. No obstante, al igual que sucedió antes, las nuevas papeletas no confieren ningún estatus legal en Tailandia y no otorgan derechos: tan sólo dejan constancia del registro con ACNUR y constituyen una mera solicitud a las autoridades tailandesas para que no detengan ni deporten a los titulares.

En los últimos años, algunas organizaciones internacionales, como el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), han defendido que se someta a los que poseen papeletas y a los que no, por igual, al proceso de determinación de la condición de refugiado con el objeto de que se les admita en los nuevos campos oficiales situados a lo largo de la frontera. Se ha recomendado al Gobierno tailandés

que permita que los solicitantes de asilo birmanos registrados permanezcan provisionalmente en Tailandia y reciban la asistencia de Naciones Unidas y otras agencias de ayuda. De momento, los esfuerzos realizados en este sentido por ACNUR y unas cuantas organizaciones internacionales han dado muy pocos frutos.

Un informe, elaborado en 2005² por JRS y el Comité Internacional de Rescate (CIR) sobre las condiciones de los titulares de papeletas birmanos en Tailandia, desveló que, de las 353 personas encuestadas, casi todas habían sufrido persecución en su país y se arriesgaban a ser objeto de graves violaciones de los derechos humanos si regresaban. Al carecer de documentos legales, las autoridades tailandesas los podían considerar inmigrantes ilegales y, por tanto, quedaban sujetos a arresto, detención y deportación. Para sobrevivir, muchos acaban trabajando ilegalmente en Tailandia, a menudo en condiciones de explotación. A diferencia de los que se hallan asentados en campos, los refugiados y solicitantes de asilo que viven en zonas urbanas no pueden recibir los servicios básicos de las ONG; además, muchos carecen de cobijo y alimentos adecuados, son arrestados con frecuencia y se les confisca su dinero y bienes.³

La concesión de papeletas a los manifestantes de septiembre es positiva, ya que ha creado la esperanza de que aquéllos con alegaciones auténticas para obtener asilo podrán registrarse con ACNUR y que, al final, las autoridades tailandesas reactivarán el sistema mediante las PAB para examinar a todos los solicitantes birmanos. Sin embargo,

aunque se estableció en 1999, el sistema de PAB no ha funcionado bien en la práctica, lo cual se debe, en parte, al miedo a que aceptar el actual número de casos crearía un efecto llamada y motivaría más llegadas desde Birmania.

Para aquellos solicitantes de asilo que huyeron de Birmania tras la represión de septiembre y que han recibido papeletas de registro provisional con ACNUR, sigue siendo una incógnita si serán examinados por el PAB. No obstante, para los miles de titulares de papeletas y para los que han previsto un cambio en la política y una mayor atención internacional a su desesperada situación, ACNUR ha dejado claro que tendrán que seguir esperando.

Existe el riesgo de que, si el gobierno tailandés no permite que las nuevas llegadas sean examinadas pronto para determinar la condición de refugiado, se cree un nuevo grupo de titulares de papeletas birmanos, que se sumará al cúmulo de los que siguen esperando algún tipo de solución duradera.

La mayor preocupación es la de los que no disponen de acceso a un proceso de registro y, por tanto, no tienen esperanza de recibir asilo. Sin papeles, no deseados e invisibles, estos titulares de papeleta y solicitantes de asilo birmanos seguirán viviendo en la marginalidad. Queda por ver si la oportunidad creada por las protestas de septiembre en Birmania

para que Tailandia y la comunidad internacional mejoren la situación de aquel país, conducirá a un cambio significativo y hacia un futuro mejor.

Chen Chen Lee (chen@jrs.or.th) es el Responsable de Información y Defensa de la causa e Isla Glaister (isla@jrs.or.th) es la Coordinadora del Programa de Mae Sot para el Servicio Jesuita a Refugiados en Tailandia (www.jrs.or.th)

1. Intercambio de correos electrónicos con ACNUR Bangkok, octubre de 2007
2. Sin ningún sitio dónde dirigirse (Nowhere to Turn), Servicio Jesuita a Refugiados y Comité Internacional de Rescate, 2005.
www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db9005ID/RMOI-6E83HG?OpenDocument
3. Véase el artículo de Vera den Otter sobre 'Los solicitantes de asilo y refugiados urbanos en Tailandia', RMF 28: www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF%2028/49-50.pdf

Los rohingya y el estatus de refugiado en Bangladesh

Pia Prytz Phiri

Los refugiados de etnia rohingya procedentes del norte del estado de Rakhine, en Myanmar, viven en una situación precaria en su país de asilo, Bangladesh, aunque últimamente han experimentado una mejora significativa.

En 1991, unos 250.000 rohingya musulmanes fueron reconocidos por el Gobierno de Bangladesh como refugiados prima facie. El gobierno repatrió a la gran mayoría a Myanmar en los años posteriores, dejando sólo dos de los 20 campos de refugiados en funcionamiento. En los últimos 16 años, los aproximadamente 27.000 rohingya restantes han vivido en dos campos de refugiados en el extremo meridional del país, cerca de Cox's Bazar.

Bangladesh no es signatario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni de su Protocolo de 1967 y no ha promulgado ninguna ley nacional relativa a cuestiones de asilo y refugiados. Sin embargo, el gobierno, por propia iniciativa, reconoció a los rohingya que llegaron en 1991 como refugiados y, en colaboración con ACNUR, les ha prestado ayuda hasta la fecha.

Es significativo el hecho de que Bangladesh se haya adherido a varios de los Convenios y Convenciones internacionales sobre derechos¹ y que su Constitución contenga disposiciones que

defiendan los derechos y obligaciones de la Carta de Naciones Unidas y salvaguarden la protección legal de los extranjeros que residen en su territorio². Así, reconoce un corpus de derecho internacional que establece el marco legal para la protección de los refugiados.

La dificultad radica en garantizar el cumplimiento y la sostenibilidad de los niveles de protección cuando no existe ninguna ley que regule el propio estatus de refugiado. La situación de los refugiados de etnia rohingya demuestra el reto que supone prestar protección de forma concreta, arbitraria y discrecional atendiendo a las circunstancias. Aunque han pasado 16 años, los refugiados rohingya siguen sin gozar de libertad de movimiento, derecho al trabajo y a la educación y, de este modo, se les niega la autosuficiencia y la autodeterminación. Se ven obligados a dedicarse a actividades clandestinas, trabajando de forma ilegal y percibiendo salarios bajos. Se les ha negado la oportunidad de progresar, aprender y mejorar, al estar, hasta hace poco, limitados a una formación informal

impartida por voluntarios refugiados con escasas asignaturas y cursos.

ACNUR en Bangladesh ha tenido cierto éxito abogando por la mejora de los niveles en todos los sectores, defendiendo la idea de solventar la discrepancia entre los principios internacionales de protección y la práctica sobre el terreno. En 2006, el organismo alcanzó acuerdos sin precedentes con el gobierno anterior, antes de los recientes acontecimientos políticos y la declaración del estado de emergencia. El gobierno provisional actual también ha dado muestras muy positivas de su compromiso con los problemas de los refugiados.

Hasta ahora, han podido observarse avances en las negociaciones entre el gobierno y ACNUR que están cambiando la forma en que se brinda la protección. En primer lugar, en 2006, el gobierno acordó permitir a ACNUR que construyera nuevos alojamientos para los refugiados en los dos campos, en reconocimiento de las pésimas condiciones de las infraestructuras de entonces, que estaban muy por debajo de los niveles internacionales. El gobierno había limitado el mantenimiento de los refugios construidos en 1992 al mínimo imprescindible, por miedo a fomentar una presencia permanente de los refugiados. Desde que se alcanzó el acuerdo, ACNUR